

Santiago, diez de septiembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

En estos autos, el entonces Ministro en Visita Extraordinaria, señor Jaime Arancibia Pinto, con fecha doce de febrero de dos mil veintiuno, dicta una sentencia definitiva en la cual, por un lado, absuelve a Gabriel Gonzalo Baeza Ceballos de los cargos de ser autor del delito de homicidio calificado de don Óscar Marchant Céspedes y, a su vez, condena a Ramón Humberto Neira Rodríguez, Sergio Alejandro González Quiroz y Luis Nibaldo Pizarro Díaz, en calidad de autores del delito de homicidio simple de la misma persona, el cual fuere cometido el día 19 de febrero de 1974, en la ciudad de Viña del Mar y, a cada uno, le impone la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales del caso y el pago de las costas de la causa.

Impugnada esta decisión, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, conociendo de los recursos enderezados en su contra, por mayoría, revoca la condena impuesta y, en su lugar, decide absolver a los condenados de los cargos imputados en su contra y, asimismo, aprueba la absolución asociada al encartado Baeza Ceballos.

Finalmente, en contra de esta última sentencia, se dedujeron sendos recursos de casación en el fondo, respecto de los cuales se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, previo al análisis del recurso impetrado, cabe mencionar que, en el considerando séptimo del fallo de primer grado, el cual fue eliminado en la sentencia de segunda instancia, se asentaron los hechos por parte del ministro instructor:

“Que Oscar Marchant Céspedes, quien se desempeñaba como garzón



en un restaurant en el sector de Reñaca, comuna de Viña del Mar, se dirigió al término de su jornada laboral el día 18 de febrero de 1974 junto a un compañero de trabajo hacia un restaurant / club nocturno conocido como “El submarino”, ubicado en calle Calera con Rojas Trigo, de la misma comuna.

Pasadas las 00:00 horas del día 19 de febrero de 1974, ya habiendo comenzado el toque de queda, mientras la víctima aún se encontraba en el lugar, esta sale hacia la calle y se involucra en una pelea con otras personas que estaban en las afueras del local.

No obstante haber terminado el incidente en las afueras del local, las personas que se encontraban allí, entre ellas Marchant Céspedes, son advertidas de la llegada de una patrulla de la Armada que se movilizaba en una camioneta marca Chevrolet, modelo C-10, a cargo del Sargento 1° Aniceto Gómez (fallecido) y que se encontraba integrada por los acusados Neira González, Baeza Ceballos, González Quiroz y Pizarro Díaz, y otros (ya fallecidos), que regresaban de su ronda en la población de Canal Beagle e iba de vuelta a su base en la Escuela de Ingeniería Naval, ubicada en la misma comuna. Estas personas comienzan a huir en distintas direcciones para no ser detenidas al estar infringiendo el toque de queda; en el caso de la víctima, éste se dirige a la escala que conecta calle Calera con Av. Concón.

Mientras Marchant se encuentra subiendo la escala, es conminado por el Sargento Gómez a detenerse, orden que habría sido desobedecida por Marchant, quien siguió subiendo. Por ello, el mismo Sargento Gómez da la orden de que se realicen disparos, los que; habrían sido realizados por los funcionarios Pizarro y Robles, primeramente al aire y luego uno al cuerpo de la víctima, impactándolo en su muslo izquierdo, por lo que cae herido en uno de los descansos de la escala.



Por orden del Sargento, Marchant Céspedes es tomado por dos de los funcionarios de la patrulla y bajado a rastras por la escala para luego ser subido al pick up de la camioneta. Luego de 20 minutos, la víctima es trasladada al Hospital de Viña del Mar, falleciendo en ese recinto asistencial a las 1:55 horas del mismo día 19 de febrero.”

SEGUNDO: Que, lo anterior, a juicio del sentenciador de primera instancia, configura la existencia de un delito de homicidio simple en la persona del señor Marchant Céspedes, el cual, a propósito de la excepción de prescripción de la acción penal opuesta por la defensa, se califica como un delito de lesa humanidad por los motivos detallados en el considerando quinto de la decisión de primer grado.

TERCERO: Que, por parte de la Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al igual que los apoderados de la Unidad Programa de Derechos Humanos y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (en adelante AFEP), se han deducido tres recursos de casación en el fondo, los cuales son sustentados en la causal del numeral 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, acusando una infracción de las leyes reguladoras de la prueba al determinar la participación criminal de los encartados.

En particular, cada uno de los recurrentes detalla los medios probatorios que, a su juicio, permiten configurar la autoría de los acusados en el ilícito investigado y que fueron desconocidos por los sentenciadores de segundo grado. En ese sentido, califican de suficientes e idóneos los testimonios que destacan, acusando que ellos no fueron valorados de manera acertada pues son idóneos para arribar a la presunción de culpabilidad que exige la ley procesal para librar una decisión condenatoria. A lo anterior, agrega otros



elementos probatorios que complementan lo aseverado y que, en definitiva, fueron desconocidos por parte del Tribunal de Alzada, todo lo cual configura el vicio de casación que describen y que, de paso, desconoce la obligación de garantía consagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto establece una obligación internacional de enjuiciar y, si se les declara culpables, castigar a los perpetradores de determinados crímenes internacionales, entre los que se cuentan los crímenes de lesa humanidad.

En tal sentido, denuncian la infracción de los artículos 1, 50 y 391 del Código Penal, así como también los artículos 457, 459 y 488 Nos. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal y, desde allí solicitan acoger los respectivos recursos, invalidando con ello el fallo de segunda instancia por la causal invocada, dictando dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en la que se resuelva, en definitiva, condenar a Ramón Humberto Neira Rodríguez, Sergio Alejandro González Quiroz, Luis Nibaldo Pizarro Díaz y Gabriel Gonzalo Baeza Ceballos, a la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales y el pago de las costas de la causa, como autores del delito de homicidio simple (calificado en el caso de la petición de la AFEP) en la persona de don Óscar Marchant Céspedes.

CUARTO: Que, la causal que se invoca (infracción a la ley reguladora de la prueba), si se esgrime aisladamente y no se le vincula con otra de las causales de invalidación que prevé el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, debe ser desestimada. En efecto, si lo que se pretende es que se altere el sustrato fáctico del fallo impugnado, es menester que conjuntamente se enarbole otro de los motivos de nulidad que dicho precepto consagra, por cuanto la sola mutación de los hechos no permite que este tribunal de casación



pueda hacer uso de sus facultades invalidatorias determinando, de oficio, cual de aquellas otras causales –taxativamente señaladas en el estatuto procesal del ramo- que denoten una errada aplicación de la ley corresponde hacer concurrente;

QUINTO: Que lo anterior es suficiente para desestimar los libelos invalidatorios formulados.

Con todo, bien cabe reafirmar la posición que tradicionalmente mantiene la jurisprudencia en materia de casación penal, en particular en lo relativo a la causal invocada por la recurrente. En efecto, la protesta planteada es la contenida en el numerando séptimo del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, el que se refiere a la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba, la cual debe tener influencia substancial en lo dispositivo de la sentencia.

En particular, los recurrentes cuestionan la valoración ejecutada por los jurisdicentes, señalando que ella vulnera las leyes reguladoras de la prueba y no permitiría alcanzar a la conclusión condenatoria arribada. Sin embargo, más allá de esta afirmación y la reproducción de los aspectos observados, en ninguna parte de sus arbitrios se desarrolla de manera adecuada la forma en que se afectaron dichas normas de valoración. Es más, los articulistas tan solo aseveran la infracción, construyendo sus reclamos en afirmaciones tan generales como las que observa en el fallo y que, en realidad, buscan que esta Corte efectúe un ejercicio vedado para esta sede, cual es una nueva valoración de los medios probatorios que, por lo demás, fueron debidamente justipreciados por los sentenciadores de instancia.

En este sentido, no está demás mencionar que los jueces de instancia son soberanos en torno a la fijación de los hechos y con ello, a la Corte



Suprema, le está negada su revisión y se le obliga a aceptarlos, siempre y cuando no exista una vulneración palmaria y flagrante sobre alguna ley reguladora de la prueba que, como dispone el motivo de casación, influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia. En ese entendido, en su momento se sostuvo que *“a los jueces de la instancia les corresponde el establecimiento de los hechos y para este efecto disponen de la facultad privativa y soberana de valorar el mérito intrínseco de los diversos medios legales de prueba acumulados en la causa, sin que el ejercicio de esta facultad de ponderar y comparar discrecional y subjetivamente esos mismos elementos del proceso, esté sujeto a la censura del tribunal de casación, ni pueda caer dentro del ámbito en que opera la causal del N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, puesto que las leyes reguladoras de la prueba, cuya infracción da base al recurso de casación en el fondo, son sólo aquellas que establecen prohibiciones o limitaciones a la facultad antedicha, como lo sería la admisión en los fundamentos del fallo de antecedentes ajenos a los medios de prueba reconocidos como tales por el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal”* (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 56, citado en la obra *Tratado de Derecho Procesal Penal. T. II, Pág. 393 y 394, del autor Rafael Fontecilla Riquelme*). En un mismo sentido se resolvió que, *“la apreciación de las leyes reguladoras de la prueba a que alude el N° 7 del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, implica la violación de una norma legal relativa a la prueba, pero no a la apreciación de los hechos, que la ley siempre radica, soberanamente, en los jueces de las instancias”* (Rev. D. y J. T. LI, Segunda Parte, Sección Cuarta, Pág. 89, citado por el referido autor).

Como se puede apreciar, existe ya una interpretación asentada respecto a la invariabilidad de los hechos apuntados por los sentenciadores del grado,



los que cuentan con la facultad de apreciar la prueba para determinar los mismos y ese ámbito escapa de la acción revisora de la Corte Suprema, salvo que los jueces violenten de forma grave las normas reguladoras de la prueba y ello tenga influencia en lo dispositivo del fallo – cuyo no es el caso de autos –, lo que debe ser descrito con claridad, siendo del todo insuficiente una enumeración de las normas legales que se denuncien violentadas o la descripción parcializada de ciertos elementos probatorios que, por lo demás, fueron debidamente tasados a propósito del análisis efectuado por los sentenciadores de fondo en el ejercicio de sus atribuciones propias, idea que predomina desde el Proyecto del Código de Procedimiento Penal para la República de Chile y que se devela en las palabras de don Manuel Egidio Ballesteros, quien expresare: *“nosotros fijamos reglas generales para la manera de estimar la prueba, y consignamos los casos en que debe estimarse bastante para acreditar la existencia de un hecho, pero al mismo tiempo dejamos al juez la libertad de criterio para hacer sus inducciones o deducciones”*.

Con lo dicho, es posible concluir que los recursos pretenden la ejecución de una tarea que ya fue efectuada, entregándose razones legales para adoptar la decisión que ahora se cuestiona pero que, en concreto, se sustenta en un ejercicio privativo de los jueces y en los que no se observan los vicios que se les endilga a ellos, debiendo así ser desechados los recursos presentados.

Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 535, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, se resuelve:

Que, se **RECHAZAN** los recursos de casación en el fondo interpuestos por doña Jacqueline Álvarez, Fiscal Judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, asimismo, aquellos deducidos por los apoderados de la Unidad



Programa de Derechos Humanos y, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, todos enderezados en contra de la sentencia de fecha seis de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

Decisión adoptada con el voto en contra de los Ministros señor Llanos y señor Matus, quienes, en su concepto, fueron del parecer de casar, de oficio el fallo en alzada, considerando que la decisión de segundo grado no ha sido extendida en la forma que prescribe la ley pues, en ella, faltan las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o no los hechos atribuidos a los procesados, lo cual conforma un requisito de forma de todo fallo y, en consecuencia, estuvieron por pronunciar la correspondiente sentencia de reemplazo en que se confirmase la sentencia en alzada.

Para ello, han tenido en consideración las siguientes razones:

1º) Que, conforme se expresa en el artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, existe una serie de causales en los que puede fundarse el recurso de casación en la forma, siendo relevante, para el caso que nos convoca, el numerando noveno de dicho precepto legal, el cual sanciona con la invalidación cuando, el fallo que se revisa no ha sido extendido en la forma dispuesta en la ley.

Así, dicho requisito ha de vincularse con lo establecido en el artículo 500 del referido cuerpo legal y cuyo texto describe aquellos elementos que debe contener la sentencia definitiva de primera instancia y la segunda que modifique o revoque la de otro tribunal, en donde, para estos efectos, resalta el numeral 4º, el que exige contar con: *“Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para*



eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta”.

2º) Que, de esta forma, aparece como necesario el establecimiento de un hecho, el cual, puede revestir o no caracteres de delito, pero, lo cierto es que los elementos probatorios rendidos en la etapa sumarial han de dar cuenta de la existencia de un sustrato fáctico que luego debe determinarse si es o no subsumible en algún tipo penal.

Ahora bien, en el caso del fallo que se revisa, los sentenciadores de alzada deciden reproducir el laudo de primera instancia, suprimiendo, eso sí, el considerando séptimo y que es, precisamente, aquel que fija los hechos que son objeto de juzgamiento y, en su lugar, no establecen ningún evento alternativo. Incluso, proceden a examinar la participación atribuida a los encartados y, en ciertos pasajes, dan por asentados algunos hechos, tales como la existencia de disparos en contra de la víctima, pero, tal conclusión resulta insuficiente para estimar cumplida la exigencia previamente descrita. Es más, los sentenciadores – en el considerando décimo noveno – estiman por acreditada la existencia de un delito de homicidio simple, no quedando claro, eso sí, cuáles habrían sido las circunstancias de este que estimaron por probados, razones que, a juicio de los disidentes, obligan a su invalidación de oficio del fallo de segunda instancia.

3º) Que, a consecuencia de lo anterior y conforme a lo dispuesto en el artículo 544 del Código de Procedimiento Penal, corresponde dictar la subsecuente sentencia de reemplazo que, a juicio de los discrepantes, no puede ser otra que la confirmación del fallo en alzada pues, en los hechos asentados en primera instancia, contruidos en base a los elementos probatorios reunidos en la instancia, fluyen antecedentes que llevan a concluir sobre la existencia de un homicidio en el que, además, existió una coautoría de



parte de los inculpados en la comisión del mismo.

4º) Que, en efecto, en los hechos asentados en el considerando séptimo de la sentencia de primera instancia se da por probado, en lo que aquí importa, que mientras la víctima *“se encuentra subiendo la escala, es conminado por el Sargento Gómez a detenerse, orden que habría sido desobedecida por Marchant, quien siguió subiendo. Por ello, el mismo Sargento Gómez da la orden de que se realicen disparos, los que; habrían sido realizados por los funcionarios Pizarro y Robles, primeramente al aire y luego uno al cuerpo de la víctima, impactándolo en su muslo izquierdo, por lo que cae herido en uno de los descansos de la escala”,* luego de lo cual *“la víctima es trasladada al Hospital de Viña del Mar, falleciendo en ese recinto asistencial a las 1:55 horas del mismo día 19 de febrero”.*

5º) Que tales antecedentes son suficientes, a juicio de esta Corte, para concluir —como lo hizo el tribunal de primera instancia— que en los hechos antes descritos todos los condenados en primera instancia compartieron un dolo común homicida y que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 15 N.º 1, es posible atribuir a todos y cada uno de ellos el homicidio cometido y en el cual intervinieron sea de manera inmediata o directa, sea impidiendo o procurando impedir que se evitase.

Ello es así porque la ley chilena permite esta imputación recíproca a personas que contribuyen al hecho, pero no realizan siquiera una parte del tipo penal, contrariamente a lo sostenido por las teorías que, sin fundamento legal, exigen para la calificación de autor o coautor la intervención en la realización del tipo penal (en el caso, hacer el disparo mortal, como parece plantearse por las defensas). En efecto, para nuestro Código, tomar parte en la ejecución del delito no significa únicamente realizar una parte de la descripción del tipo



penal, como exige la teoría objetivo-formal que parecen sostener los recurrentes, sino cualquiera de los supuestos empíricos de los N.º 1 y 3 del art. 15, que describen formas de intervención punible en un contexto fáctico que excede los elementos de la realidad subsumibles en el tipo penal. En efecto, la aproximación objetivo-formal, si bien permite fijar los casos de coautoría más evidentes, no logra captar la complejidad de las relaciones entre los hechos y todas las descripciones típicas, pues sería únicamente aplicable de delitos descritos con diferentes conductas (ejercer la intimidación para forzar la voluntad o la fuerza para entrar a un lugar habitado, por una parte, y proceder al acceso carnal o a la apropiación, por otra, arts. 361 N.º 1 y 440). Sin embargo, en los delitos puros de resultado, como el homicidio de marras, las dificultades que existen para identificar al autor se multiplican cuando varios son imputados por ella, como en la especie, donde la muerte es provocada por sucesivos o simultáneos ataques a la víctima. Incluso en casos más sencillos, como el de la realización simultánea de un ataque contra otro, hiriéndolo, golpeándolo o maltratándolo de obra, la atribución de los resultados del artículo 397 N.º 2 no parece resolverse solo con la afirmación de que el agente ha herido, golpeado o maltratado a otro. Por ello, nuestra jurisprudencia afirma que, incluso tomar parte en un hecho “de manera inmediata y directa” no significa realizar formalmente una parte del tipo, sino también intervenir en los hechos materiales que contribuyan directamente a su realización (SCS 7 de enero de 2012, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia, Código Penal, p. 108). El fundamento para imputar en todos estos casos responsabilidad a título de autor no es una consideración formal respecto de la descripción típica, sino material, que emana de la existencia del hecho colectivo que abarca las diferentes contribuciones de los distintos intervinientes en el hecho colectivo,



que se imputan recíprocamente para otorgarle a cada uno el título de autor (teoría objetivo-material). Ese hecho colectivo se define por el acuerdo o concierto para su realización: el conocimiento y voluntad de realización de cada una de las partes del hecho individual que a cada uno corresponde y del hecho conjunto que de este modo se materializa, razón por la cual, aunque individualmente ninguno de los coautores realice el tipo penal, todos responden como si cada uno lo hubiera realizado completamente, imputándoseles a unos y otros, recíprocamente, sus contribuciones individuales. Aquí, la responsabilidad individual por el hecho colectivo significa que, en virtud del vínculo que crea el acuerdo de voluntades, cada uno de los intervinientes se puede considerar responsable del hecho colectivo como un todo, como en el ejemplo clásico del asesinato de César: no sabemos quién de los conjurados le dio la estocada mortal, ni cuál de las veintitrés que recibió fue la definitiva, pero todos ellos respondieron por el magnicidio como autores, incluyendo a Trebonio que entretenía a Marco Antonio para que no lo evitara, Casca que da inicio al plan y falla en su primer intento y Bruto, que solo hiere a César en la ingle, pues, “todos tenían que tomar parte en el sacrificio y gustar del crimen” (Plutarco (2007): *Vidas paralelas*, t. VI, Madrid, pos. 3284).

La coautoría así entendida no necesita simultaneidad, sobre todo en los casos de delitos de resultado, pues la intervención anterior, como la del popular autor intelectual, también puede ser vista como parte de la división del trabajo que posibilita la realización del tipo, cuyos contornos nunca podrán estar completamente definidos: “lo común abarca también lo que suceda a continuación: el sujeto que ejecuta, ejecuta la obra de todos los intervinientes, no solo la suya propia” y “responde jurídico-penalmente porque la ejecución es, a causa del reparto de trabajo vinculante, también la suya” (Jakobs (2000), p.



98).

Este elemento subjetivo adicional que constituye el vínculo que fundamenta la imputación recíproca y que, aunque supone un acuerdo en la realización de un delito determinado, el lugar, modo y tiempo de ejecutarlo, así como la decisión seria de ponerlo por obra, no exige un acuerdo acerca de todos y cada uno de los detalles de su ejecución, ni premeditación ni su puesta por escrito o verbalización detallada, tal como ocurre en el caso de autos.

Por eso, casuísticamente, se afirma que toman parte en la ejecución del hecho de manera inmediata y directa quienes, estando de acuerdo en la muerte del ofendido, lo golpean conjuntamente, aun cuando no se sepa quién de ellos lo ultima; y en una violación se han considerado coautores tanto a quienes ejercen la fuerza contra la víctima, aunque no la penetren sexualmente, como a quienes realizan esa conducta (Etcheberry, Derecho Penal en la Jurisprudencia, t. II, p. 26, y t. IV, p. 176, respectivamente). Y, por tanto, en la especie, la ley considera también que “toman parte” en la ejecución del delito —de manera inmediata y directa— quienes disparan conjuntamente contra la víctima aunque uno solo de ellos haya conseguido propinar el balazo mortal (imputación recíproca).

6°) Que, por lo anterior, ha de descartarse la defensa planteada por los acusados, quienes, en todo momento, buscaron evadir su responsabilidad, cayendo en imprecisiones, casualmente, en los aspectos más relevantes sobre lo sucedido, pero, son claros en sindicar a quien sería el autor del disparo, de allí que resulta inconcuso la existencia de, a lo menos, un tiro dirigido a la víctima y que fue la causa precisa y necesaria de su muerte pues ella provocó, en la parte superior del muslo izquierdo, una ruptura de vasos importantes, arterias y venas, lo que causó una hemorragia profusa consiguiente, y con la



anemia aguda concomitante, provocó el fallecimiento del señor Céspedes. Ahora, también es evidente que el ejecutor de dicho disparo actuó de una forma dolosa, a lo menos *eventual*, ya que una acción de esa naturaleza – disparo de un arma de fuego en contra de una persona –, conforma un acto que racionalmente puede terminar el fallecimiento de este, sobre todo si se ejecuta en horas de la noche y con el afectado huyendo por las escaleras del sector.

Por otra parte, la posición de los encartados también descansó en asegurar que el autor del disparo que ultimó a la víctima fue realizado por Aniceto Gómez Sapiain (fallecido en la actualidad), quien, ante la Justicia Naval, reconoció este acto. Sin embargo, ellos no se hacen cargo de la circunstancia que sus acciones, justamente, conforman un caso de coautoría, en que, independiente de quien haya sido el autor del disparo fatal, todos ellos dispararon contra el afectado, es decir, ejecutaron un hecho colectivo que buscaba darle muerte, imputándoseles a unos y otros, recíprocamente, sus contribuciones individuales.

7°) Que, la anterior conclusión no puede extenderse a las acciones ejecutadas por parte de Gabriel Gonzalo Baeza Ceballos, conductor de la patrulla, quien solo se quedó a la espera de sus acompañantes y tal actividad no se muestra como un actor real de contribución al llamado hecho colectivo, de tal manera que no existe razón ni prueba alguna que lo coloque en una actividad penalmente reprochable y, por cierto, ninguno de los argumentos expuestos por la apoderada de la Unidad Programa de Derechos Humanos alteran esta conclusión.

8°) Que, lo mismo sucede en torno a la decisión de desestimar las agravantes invocadas, existiendo razones acertadas para considerar que las



mismas no son concurrentes al presente caso pues, por un lado, no se cumplen con los requisitos de procedencia y, las mismas, conforman elementos que son propios de las circunstancias particulares en que se cometió el ilícito, siendo lo errado, precisamente, volver a considerarlas para agravar la penalidad.

En lo que respecta a la resolución de considerar que los sentenciados cuentan con una irreprochable conducta anterior, configurando con ello la minorante de responsabilidad criminal descrita en el numeral 6° del artículo 11 del Código Punitivo, ha de estimarse que tal decisión es ajustada al mérito del proceso pues, como se apunta, los inculpados carecen de anotaciones pretéritas el hecho punible, circunstancia que se erige como una razón suficiente para considerar concurrente la atenuante en análisis.

9°) Que, finalmente, los argumentos expuestos en torno al desacuerdo de la pena aplicada a los sentenciados, luego de revisadas las reglas usadas para su determinación y que son detalladas en el considerando trigésimo primero, éstas se muestran ajustadas al rango legal y de la forma que mandata la legislación criminal.

10°) Que, en este orden de cosas, estos disidentes concuerdan con el informe fiscal emitido.

Regístrese y comuníquese.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Gajardo y el voto en contra por sus autores.

Rol N° 186.062-2023



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Llanos S., la Ministra Sra. María Teresa Letelier R., el Ministro Sr. Jean Pierre Matus A., y la Ministra Sra. María Cristina Gajardo H. No firman los Ministros Sres. Valderrama y Matus, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ambos con licencia médica.



En Santiago, a diez de septiembre de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

